

# GACETA DE PUERTO-RICO.

SE PUBLICA



SE SUSCRIBE

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.

En la Imprenta de Gonzalez. Fortaleza 15.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

AÑO 1870.

MARTES 25 DE OCTUBRE.

NUM. 128.

## PARTE OFICIAL.

GOBIERNO SUPERIOR CIVIL  
DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

DECRETO.

Durante el año que cursa ha tenido lugar, aunque raro por fortuna, alguno que otro caso criminal de aquellos que las leyes castigan con las mas severas penas, como por ejemplo, los asesinatos cometidos en Toa-baja y Arecibo en las personas de D. Manuel María Sampayo y D. Francisco Salgado, sin que el Gobierno haya tenido conocimiento de ellos en su oportunidad, segun está mandado por circular número 184 de 26 de Enero de 1847 que muy terminantemente previene se participe sin pérdida de tiempo á este Gobierno de cualquier incidente que ocurra de carácter grave como los expresados y otros de su categoría.

En su consecuencia recomiendo con toda especialidad á las Autoridades locales de los pueblos de esta Provincia el mas exacto y puntual cumplimiento de dicha disposicion Superior, dando cuenta al Gobierno y al Corregidor del Departamento, en el momento que por desgracia ocurra uno de esos casos tan inesperados en este leal y pacífico país, sin perjuicio de las diligencias sumarias y demás que compete á los Tribunales de Justicia.

Puerto-Rico 18 de Octubre de 1870.—P. A. IZQUIERDO.

Secretaría del Gobierno Superior Civil.

(CONTINUACION.)

DECRETO.

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en consecuencia de lo prescrito en la disposicion transitoria 4ª de la ley provincial de la Península de 20 del corriente,

Vengo en disponer que, sin perjuicio de las alteraciones que las Cortes Constituyentes acuerden en su día, se observe desde luego en la Isla de Puerto-Rico el siguiente Decreto de Gobierno y Administracion de la misma.

CAPITULO PRIMERO.

De las Autoridades provinciales.

Artículo 1.º—El Gobierno y Administracion de la Isla de Puerto-Rico se ejercerá por el Gobernador Superior Civil y Diputacion provincial.

Art. 2.º—El Gobernador Superior Civil será nombrado y separado por el Gobierno Supremo. El ejercicio de este cargo será incompatible con el ejercicio de cualquier mando militar, y con todo otro cargo provincial ó municipal de cualquier especie.

Art. 3.º—La Diputacion provincial se compondrá de un Diputado por cada 25,000 habitantes elegidos en la forma que esta ley y la electoral determinen.

CAPITULO II.

Del Gobernador Superior Civil.

SECCION 1.ª

ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR SUPERIOR CIVIL.

Art. 4.º—Es obligacion del Gobernador Superior Civil vigilar y conservar el órden público en la Isla, guardar la integridad de ésta, mantener su Constitucion política y velar por el cumplimiento de las leyes y el respeto de los derechos.

En tal concepto le corresponde:

1.º Publicar, circular, ejecutar y hacer que se

ejecuten las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, dictando los bandos y disposiciones necesarios al efecto, é imponiendo las penas que en aquellos se determinen. Si en las leyes y reglamentos no se establece penalidad especial, el Gobernador Superior Civil podrá corregir las infracciones legales con multas que no excedan de 150 pesetas.

2.º Reclamar el auxilio de la fuerza armada.

3.º Suspender toda asociacion que delinca, sometiendo incontinenti los reos al Juez competente.

4.º Suspender, oyendo á la Junta de Autoridades y dando inmediatamente cuenta al Gobierno central, toda asociacion cuyo objeto ó cuyos medios comprometan la seguridad del Estado.

5.º Suspender ó cerrar cualquier establecimiento de enseñanza en el caso de delincuencia, ó si compromete la seguridad del Estado, entregando á los Tribunales las personas responsables y dando cuenta al Gobierno.

6.º Instruir, por sí mismo ó por sus delegados, las primeras diligencias en los delitos cuyo descubrimiento se deba á su Autoridad y en los casos en que no se halle presente la judicial, entregando á esta las personas detenidas y las diligencias practicadas.

7.º Convocar la Junta de Autoridades para los efectos de los números 3.º, 10 y 11 de este artículo y de los artículos 14 y 15 del proyecto de ley de Constitucion de Puerto-Rico, en los demás casos que las leyes determinen y siempre que lo estime oportuno, ó que lo solicite la mayoría de dichas Autoridades.

8.º Nombrar en los pueblos, donde fuere necesario, delegados de su Autoridad que ejerzan las atribuciones del Gobierno y suplan la accion de los Ayuntamientos en los casos previstos por las leyes.

9.º Suspender la ejecucion de los decretos y disposiciones del Gobierno siempre que puedan ocasionar perturbacion en el órden moral ó materialmente, ó comprometer de una manera grave los intereses públicos. Esta suspension no podrá verificarse sino despues de oír á la Junta de Autoridades y dando cuenta razonada al Ministro de Ultramar por el telégrafo, si lo hubiere, ó por el conducto mas breve y expedito.

10. Suspender, por causas iguales á las que señala el párrafo anterior y en la forma que el mismo expresa, la ejecucion de los acuerdos dictados por otras Autoridades, aunque fueren de la competencia de ellas y debieren producir todos sus efectos en circunstancias ordinarias.

11. Indultar, con las limitaciones y en la forma que establecen las Reales órdenes de 29 de Mayo de 1855 y posteriores, en tanto que se haga extensiva á la provincia la ley provisional sancionada por las Cortes Constituyentes sobre el ejercicio de la gracia de indulto.

12. Señalar los establecimientos en que deban cumplirse las condenas, y disponer el ingreso en ellos de los penados.

13. Ejercer todas las demás atribuciones de gobierno que las leyes le señalen ó le delegue el poder central.

Art. 5.º—La Junta de Autoridades la compondrán el Gobernador Superior Civil, Presidente, el Gobernador militar, el Comandante del Apostadero, el Regente y Fiscal de la Audiencia, el Intendente de Hacienda y el Vice-presidente de la Diputacion provincial. Cualquiera que sea el acuerdo ó parecer de la Junta, de que se levantará acta, queda el Presidente en libertad de resolver lo que entienda mas conveniente al desempeño de su cargo, sin que el fundar su determinacion en el dictámen u opinion de otras Autoridades le exima de responsabilidad.

Art. 6.º—Corresponde al Gobernador Superior Civil como Gefe superior de la Administracion en la Isla:

1.º—Mantener la integridad de la jurisdiccion administrativa, suscitando al efecto competencias á los Tribunales contencioso-administrativos ó judiciales cuando conozcan de asuntos propios de la Administracion activa ó de la Administracion en general.

2.º—Llevar el nombre y representacion de la provincia en todos los asuntos judiciales, infor-

mes, correspondencia y comunicaciones de todo género.

3.º—Vigilar todos los ramos de la Administracion pública en la isla, dar cuenta al Gobierno de lo que se observe en la administracion de justicia, ejercer en la parte administrativa las atribuciones que las leyes y reglamentos señalen, y proponer al Gobierno cuanto concierna al fomento de los intereses morales y materiales y no sea de la competencia de las Autoridades ó corporaciones locales.

4.º—Suspender, por causa justificada en expediente, á los funcionarios de la Administracion cuyo nombramiento corresponda al poder central, dando á este cuenta inmediatamente.

5.º—Trasladar los funcionarios públicos dando cuenta al Gobierno, y cubrir las vacantes de la misma forma y con carácter interino.

6.º—Imponer multas á los funcionarios y corporaciones dependientes de su autoridad. Estas multas no podrán exceder de 300 pesetas, á no prescribirse otra cosa en las leyes especiales.

Art. 7.º—El Gobernador superior civil tiene ademas el carácter de delegado del poder central acerca de las operaciones locales. En tal concepto le compete:

1.º Presidir, sin voto, la Diputacion provincial y convocarla cuando lo estime conveniente.

2.º Suspender los acuerdos de la Diputacion provincial y los Ayuntamientos en los casos y forma que previenen este decreto y el orgánico municipal.

3.º Suplir por sí ó por sus delegados, con arreglo á los mismos decretos, la accion municipal y provincial, ya sea nombrando la Diputacion y Ayuntamientos en los casos que no se reúnan, ó completando su número cuando no lo hagan en el suficiente para tomar acuerdos; ya supliendo las funciones de las mismas corporaciones populares cuando estas se negaran á ejercerlas.

4.º Suspender en el ejercicio de su cargo á los Alcaldes, Tenientes y Consejales en los casos y forma prescritos en el decreto orgánico municipal.

Art. 8.º—El Gobernador superior civil no podrá hacer entrega de su cargo ni ausentarse de la isla sin expreso mandato del Gobierno central.

Art. 9.º—En ausencia ó imposibilidad del Gobernador superior civil será reemplazado por el Intendente general de Hacienda, á no acordar otra cosa el Gobierno central. Si la ausencia es sólo de la capital de la isla, continuará desempeñando su cargo desde el punto en que se halle, sin perjuicio de lo cual podrá autorizar á los Gefes administrativos y al Secretario para despachar los asuntos de mera tramitacion.

SECCION SEGUNDA.

RECURSOS CONTRA LAS PROVIDENCIAS DEL GOBERNADOR SUPERIOR CIVIL.

Art. 10.—Las providencias del Gobernador superior civil pueden ser revocadas: por su misma autoridad; por el Gobierno central; por los Tribunales.

Art. 11.—El Gobernador superior civil podrá revocar sus propias providencias ó las de sus antecesores:

1.º Cuando se refieran á asuntos de gobierno.

2.º Cuando las hayan dictado como delegados del poder central cerca de la Administracion local y no haya pasado el conocimiento del asunto en virtud de las leyes al Gobierno ó á los Tribunales.

3.º Cuando se refieran á materias administrativas y no sean declaratorias de derechos.

Art. 12.—El Gobernador Superior Civil no podrá revocar sus providencias ni las de sus antecesores si han servido de base á alguna sentencia de los Tribunales judiciales ó contencioso-administrativos.

Art. 13.—Tampoco podrá revocarlas si fueren declaratorias de derechos. Si el Gobernador superior civil entendiere que alguna providencia de esta índole causa perjuicio á los intereses de la Administracion, podrá:

1.º Solicitar su revocacion del poder central si segun las leyes no se entiende ultimada en la vía gubernativa en la materia hasta que recaiga acuerdo del Gobierno supremo.

2.º Pasar al Fiscal de la Audiencia el oportuno oficio para que solicite la revocacion en la via contenciosa si la providencia hubiese causado estado por recaer sobre materia en la cual se ultime la via gubernativa por las providencias de la Autoridad superior de la provincia.

3.º Hacer que se entable la oportuna demanda ante los Tribunales judiciales si fuese materia de la competencia de estos.

Art. 14.—El Gobierno Supremo puede revocar ó reformar las providencias del Gobernador superior civil, á que se refiere el artículo 11, cuando las considere contrarias á las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, ó las juzgue inconvenientes para la buena administracion y gobierno de la isla.

Art. 15.—Puede tambien revocar, reformar ó confirmar con arreglo á las leyes las providencias del Gobernador superior civil á que se refiere el párrafo primero del art. 13 cuando reclamen contra ellas los particulares, corporaciones ó el Gobernador.

Art. 16.—Cuando se reclame contra las providencias del Gobernador superior civil á que se refiere el art. 14 y el Gobierno no considere oportuno revocarlas ó reformarlas, se limitará á declararla así ó á aprobar la conducta del Gobernador; pero no confirmará de modo alguno la providencia reclamada, la cual conservará siempre el carácter de acuerdo del Gobernador, á fin de que pueda revocarse ó reformarse por éste en lo sucesivo, si, cambiadas las circunstancias, fuese conveniente.

Art. 17.—La Audiencia del territorio obrando como Tribunal contencioso-administrativo y en la forma que las leyes especiales previenen, puede dejar sin efecto los acuerdos del Gobernador superior civil, en cuanto lesionen derechos de un tercero nacidos de leyes, reglamentos ó disposiciones administrativas de carácter general, de concesiones hechas por la Administracion, ó de contratos celebrados con la misma para la ejecucion de servicios públicos, siempre que aquellas providencias causen estado por ser de las comprendidas en el párrafo segundo del art. 13.

Art. 18.—Los Tribunales judiciales pueden igualmente dejar sin efecto las providencias del Gobernador superior civil en la parte relativa á derechos nacido en el título civil, siempre que los particulares acudan ante ellos en la forma que las leyes determinan.

CAPITULO III.

De la Diputacion provincial.

SECCION PRIMERA.

ORGANIZACION Y MODO DE FUNCIONAR DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.

Art. 19.—La isla de Puerto-Rico se dividirá en tantos distritos electorales como Diputados provinciales deban elegirse en virtud de lo prescrito en el artículo 3.º Si al hacer la division de distritos resultase un sobrante mayor de 13,000 habitantes, se elegirá un Diputado más.

Art. 20.—El Gobierno supremo practicará la division en distritos electorales la cual no podrá alterarse en lo sucesivo sin oír previamente á la Diputacion provincial, Gobernador civil y Consejo de Estado. El Gobierno supremo designará igualmente el pueblo cabeza del distrito electoral.

Art. 21.—Todo Municipio formará parte de un solo distrito electoral.

Art. 22.—Por cada distrito se elegirá un Diputado y un suplente.

Art. 23.—La eleccion de Diputados provinciales tendrá lugar en la primera quincena del tercer mes del año económico. El Gobernador Superior civil dispone las elecciones ordinarias y extraordinarias en las épocas y casos que previene la ley. Las elecciones serán anunciadas en los cinco dias siguientes al acuerdo en que se funden, y se verificarán dentro de un plazo que no baje de 10 dias ni exceda de 20 despues de la convocatoria.

Art. 24.—Las elecciones se verificarán en cada Municipio por las listas formadas para las municipales, y en igual forma que estas.